



## PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

Octubre 24, 2015

**John H. Knox**

**Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente**

**Henry C. Lauerman Professor of International Law**

**Wake Forest University School of Law**

Estimado Relator Knox:

El motivo de la presente es enviarle un análisis que puede resultar útil en preparación del informe que entregará en marzo al Consejo de Derechos Humanos. Dicho análisis está contenido en el escrito *amicus curiae* que el **Programa de Derechos Humanos** y el **Programa de Medio Ambiente** de la **Universidad Iberoamericana, Ciudad de México**, entregaron a la Suprema Corte de Justicia de México en relación a las denuncias que hicieron comunidades mayas en contra de la autorización del gobierno para la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada. Ello en perjuicio del derecho del pueblo maya al medio ambiente y al uso de sus recursos naturales para la producción de miel orgánica y en violación al derecho a la consulta.

El escrito *amicus* (disponible en inglés y español) se titula ***“El derecho humano a un medio ambiente sano: el contenido y el alcance de las obligaciones que derivan de éste a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Ambiental”*** y aborda: (1) el concepto de medio ambiente; (2) su relación con otros derechos; (3) el fundamento jurídico del derecho a un medio ambiente sano; (4) su contenido normativo; (5) obligaciones derivadas de este derecho y (6) la adopción de medidas preventivas y precautorias para el cumplimiento de las obligaciones. Particularmente relevante para usted pueden ser las secciones VII, VIII y XI del documento, mismas que elaboran una interpretación del contenido del derecho a partir de una perspectiva integral que considera no sólo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también el Derecho Ambiental.

Atentamente,

**Denise GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.St.**

**Coordinadora**

**Tel. (55) 5950-4000 Ext. 7658**

**[denise.gonzalez@ibero.mx](mailto:denise.gonzalez@ibero.mx)**





### **AMICUS CURIAE**

**El derecho humano a un medio ambiente sano: el contenido y el alcance de las obligaciones que derivan de éste a luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Ambiental**

## **I. OBJETO DEL PRESENTE ESCRITO**

El presente *Amicus Curiae* tiene por objeto proporcionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación elementos de análisis para mejor resolver los Amparos en Revisión 498/2015, 499/2015, 500/2015, 241/2015, 270/2015, 410/2015 y 198/2015, todos relacionados con la búsqueda de la protección de la justicia federal que hacen comunidades mayas en contra de la expedición de un permiso para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada por parte de un tercero, que implica la alteración del hábitat y de los recursos naturales que forman parte del patrimonio de las comunidades mayas en Campeche (en específico, la producción de miel) y la utilización de químicos nocivos; además de las potenciales afectaciones al ser humano por el uso de organismos genéticamente modificados.

Para ello, este escrito *Amicus* versará sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y específicamente: (1) el concepto de medio ambiente; (2) la relación que guarda aquél con otros derechos humanos; (3) el fundamento jurídico del derecho humano a un medio ambiente sano; (4) su contenido normativo; (5) el alcance de las obligaciones derivadas del mismo; y (6) la adopción de medidas preventivas y precautorias para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Cabe mencionar que la estructura del presente documento retoma la estructura de análisis utilizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, Comité DESC) al momento de redactar sus Observaciones Generales.

## **II. INTERÉS EN EL AMICUS CURIAE**

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, establecido en 1998, es un espacio académico que busca incidir en la creación y consolidación de una cultura de derechos humanos que cruce todos los ámbitos de la vida política y social en México, mediante la investigación con pertinencia social, la difusión, la educación y la promoción del debate.

Por su parte, el Programa de Medio Ambiente de la propia Universidad tiene como misión impulsar procesos de incorporación del enfoque de la sustentabilidad en las distintas funciones sustantivas de la universidad; así como para impulsar procesos, construir alternativas y aportar elementos de solución a problemáticas socioambientales desde el punto de vista de la sustentabilidad.

Por su parte, el Programa de Medio Ambiente (PMA) de la propia Universidad busca responder a la crisis socioambiental de nuestro tiempo promoviendo la incorporación transversal del enfoque de la sustentabilidad en el quehacer universitario, tanto en su ámbito interno como en sus proyectos de incidencia social.

El interés en el presente *Amicus* se sustenta, por un lado, en la necesidad de contribuir a la discusión que actualmente tiene lugar a nivel internacional respecto al derecho humano a un medio ambiente sano<sup>1</sup> -y en particular su fundamento jurídico, contenido y alcance- y, por el otro, en la necesidad de fortalecer el goce de los derechos de los pueblos indígenas, concretamente en relación al medio ambiente que los rodea y que forma parte de su esfera de derechos protegidos.

### III. INTRODUCCIÓN

El medio ambiente es un bien insustituible; es la “casa común”<sup>2</sup> de la que depende la humanidad para sobrevivir. Su protección y cuidado es vital para asegurar la calidad de vida de las sociedades y en última instancia la continuidad de la vida en la Tierra. Ello se logra no sólo previniendo y revirtiendo actividades y procesos que implican comprobadamente una forma de degradación, sino también extremando precauciones frente a actividades que, sin existir plena certeza científica sobre el daño que causarán, implican un riesgo de daño ambiental y humano.

En contraste con ese ideal, la actividad humana da cuenta hoy de una depredación y una destrucción sin precedentes, acentuada por la “rapidación” de las acciones humanas, en contraste con “la natural lentitud de la evolución biológica”.<sup>3</sup> La errónea conceptualización del medio ambiente como un conjunto de recursos capaces de regenerarse rápidamente y a perpetuidad, y la relación que establecemos como seres humanos con él a partir de dicha forma de entendimiento, priva al ideal de *sustentabilidad* de todo contenido. El medio ambiente, por lo tanto, debe ser tratado fundamentalmente como un bien social y no sólo como un bien económico.<sup>4</sup>

Es en este marco de ideas que debemos ubicar e interpretar el derecho a un medio ambiente sano. Se reconoce que la interpretación del derecho a un medio ambiente sano parte de una visión antropocentrista que si bien busca proteger la dignidad humana, pretende en última instancia la salvaguarda de la vida en sus términos más amplios. Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano favorece la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales y el equilibrio ecológico, pero también la existencia de

---

<sup>1</sup> Como se referirá más adelante recientemente en el año 2015 fue nombrado el *Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible* con el mandato de analizar y ofrecer aclaraciones sobre las obligaciones que impone el deber de proteger y garantizar un medio ambiente sano.

<sup>2</sup> Carta Encíclica “*Laudato Si*”, sobre el cuidado de la casa común, del Papa Francisco (2015). México: Librería Editrice Vaticana.

<sup>3</sup> Ibid. p. 17.

<sup>4</sup> Así ha sido señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en relación al derecho al agua, postura que aquí defendemos respecto del medio ambiente también. Comité DESC. Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), párr. 11.

condiciones de vida digna para las generaciones presentes e incluso la preservación de la vida humana, al posibilitar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

#### **IV. EL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE**

Se entiende al medio ambiente como la relación dialéctica entre el sistema social y el sistema natural. En este sentido la acción transformadora de la sociedad influye en la naturaleza, así como ésta condiciona los procesos sociales. Para efectos de este documento se emplea el término ambiente o medio ambiente para referir particularmente al sistema natural, conformado por los elementos biológicos, físicos y químicos que influyen en la vida de los seres humanos.<sup>5</sup>

De acuerdo con la Suprema Corte el medio ambiente es “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, procurando que esté libre de contaminación, a fin de asegurar el equilibrio ecológico”.

A partir de lo anterior es posible decir que en el concepto de medio ambiente debemos necesariamente incluir los procesos físicos y biológicos que lo sustentan así como la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire y demás componentes naturales que, en su conjunto, conforman un sistema ecológicamente equilibrado.<sup>6</sup>

#### **V. EL MEDIO AMBIENTE SANO GUARDA UNA RELACIÓN ESTRECHA CON OTROS DERECHOS HUMANOS**

Ha sido reconocido como un principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el medio ambiente sano es un prerequisite para la protección de los derechos humanos.<sup>7</sup> Garantizarlo repercute necesariamente en el bienestar de las personas; en la salud, en la integridad física y psicológica y en la vida, tanto a nivel individual como colectivo (es decir, en sus aspectos familiares y comunitarios). No hacerlo,

---

<sup>5</sup> Prüss-Üstün, Annette (2006). “Ambientes saludables y prevención de enfermedades. Hacia una estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente”. (*Preventing disease through healthy environments*). Suiza: Organización Mundial de la Salud, p. 21. Disponible en: [http://www.who.int/quantifying\\_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf?ua=1](http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf?ua=1) y [http://www.who.int/quantifying\\_ehimpacts/publications/previdisexecsumsp.pdf](http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/previdisexecsumsp.pdf) (resumen ejecutivo en español); véase también César Sepúlveda. Derecho a un medio ambiente sano. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* No. 82. Disponible en: <http://juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/82/art/art9.htm>

<sup>6</sup> Tesis: SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO QUINTO, CONSTITUCIONAL. 2000164. 2a. IX/2011 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, p. 3816.

<sup>7</sup> Bridget Lewis. “Environmental rights or a right the to environment? Exploring the nexus between human rights and environmental protection”. *MqJICEL* (2012) Vol 8(1):36-47, p. 1.



por el contrario, puede tener consecuencias negativas e incluso funestas para el bienestar de personas, familias y comunidades enteras. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “[s]i el medio ambiente fuera más saludable, cada año se podrían evitar hasta 13 millones de defunciones”.<sup>8</sup>

La comunidad internacional de Naciones y los organismos internacionales se han pronunciado en este sentido en diversas oportunidades. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972 y que constituye un instrumento *hito* en el *corpus juris* ambiental, establece en su primer párrafo que el medio ambiente es esencial “para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”.<sup>9</sup>

En 1990 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 45/94 en la que “[r]econoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar.” Ese mismo año la Comisión de Derechos Humanos adoptó la Resolución 1990/41 en la que destacó la relación existente entre los derechos humanos y el medio ambiente.

En su Opinión Separada en el caso *Gabcikovo-Nagymaros* (1997), el Juez y entonces Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Christopher G. Weeramantry señaló que “la protección del ambiente es asimismo una parte fundamental de la doctrina contemporánea de los derechos humanos, pues es *sine qua non* para numerosos derechos humanos como el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida. Es escasamente necesario ahondar en esto, ya que el daño al ambiente puede deteriorar y socavar todos los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos”(traducción propia).<sup>10</sup>

Más recientemente, en el denominado Estudio Analítico sobre la relación existente entre los derechos humanos y el medio ambiente (2011) la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso cómo el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos da cuenta del amplio reconocimiento que existe respecto de dicha relación<sup>11</sup> y, más concretamente, sobre cómo “el medio ambiente desempeña una

---

<sup>8</sup> La Organización Mundial de la Salud cuenta con una diversidad de datos y cifras que dan cuenta de cómo los factores ambientales inciden en la salud humana. Véase “10 datos sobre medio ambiente y prevención de enfermedades”. Disponible en: [http://www.who.int/features/factfiles/environmental\\_health/es/](http://www.who.int/features/factfiles/environmental_health/es/). Véase también Prüss-Ustün, op. cit. *supra* nota 5.

<sup>9</sup> Declaración de las Naciones Unidas en la Conferencia sobre el Medio Ambiente, Declaración de Estocolmo. U.N. Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1(1973); 11 ILM 1416 (1972).

<sup>10</sup> Juez Christopher G. Weeramantry, Opinión Separada, Caso *Gabcikovo-Nagymaros (Hungría vs. Eslovaquia)*. Corte Internacional de Justicia (25 septiembre 1997), ICJ Reports 1997, 111 n.78.

<sup>11</sup> Por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24, párr. 2c)); Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 24) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículo.

función esencial en la protección y la promoción de los derechos humanos” (A/HRC/19/34, párr. 23). Luego de observar lo anterior la Alta Comisionada señala de forma contundente que “la necesidad de proteger y promover un medio ambiente saludable es indispensable no solo para los derechos humanos, sino también para proteger el patrimonio común de la humanidad” (A/HRC/19/34, párr. 24).

A la luz de lo anterior, es fácil comprender el espíritu y la motivación de nuestro Congreso de la Unión al reformar en el año 1999 el artículo 4 constitucional para incluir el derecho a un medio ambiente sano. De acuerdo con la Exposición de Motivos de dicha reforma, “el derecho al ambiente, cuyo objeto último no es sino asegurar la dignidad de las personas, es un derecho que manifiesta un ideal y una serie de finalidades que la humanidad, consciente ya de los riesgos que para su existencia supone el deterioro del ambiente, se ha propuesto alcanzar”.<sup>12</sup>

Al incluir el derecho a un medio ambiente sano en la Constitución el Legislativo reconoció implícitamente la enorme relevancia y el impacto que tiene el medio ambiente en el ejercicio de los derechos humanos. Pero además, de forma progresiva, dio un paso más para reconocer el medio ambiente sano como derecho humano autónomo. Con ello nuestro Congreso de la Unión abonó no sólo a la tendencia global a reconocer constitucionalmente este derecho sino también a la construcción de un derecho consuetudinario en la materia.<sup>13</sup>

A lo largo de los años “los tribunales regionales de derechos humanos han dedicado una vasta jurisprudencia a la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente”.<sup>14</sup>

---

11); Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de 1998 (Convención de Aarhus).

<sup>12</sup> DENUNCIA POPULAR EN MATERIA AMBIENTAL. EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL DISPONER, POR UNA PARTE, QUE TODO HECHO, ACTO U OMISIÓN QUE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES DE ESE ORDENAMIENTO Y LAS DEMÁS QUE REGULEN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, SUS RECURSOS O BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS A ÉSTOS PODRÁ SER DENUNCIADO ANTE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL Y, POR OTRA, QUE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR DICHA CORPORACIÓN EN LAS QUE, EN SU CASO, CORRESPONDA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL EN LA MATERIA U OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES, DEBERÁN SER REMITIDAS A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, NO VULNERA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente). Registro Núm. 23928; Décima Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012 , Tomo 1, página 477. Disponible en: <http://sif.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23928&Clase=DetalleTesisEjecutorias>

<sup>13</sup> Para 1994 “más de 60 países habían aprobado disposiciones constitucionales sobre la protección del medio ambiente”, número que se incrementó a 140 en el 2010. Véase OACNUDH. Estudio Analítico sobre la relación existente entre los derechos humanos y el medio ambiente (2011), U.N. Doc. A/HRC/19/34, párr. 30).

<sup>14</sup> Consejo de Derechos Humanos. Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. U.N.Doc. A/ HRC/22/43 (24 de diciembre de 2012). Véase también Comisión



## VI. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

El artículo 4, párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Dicho precepto constitucional agrega que “[e]l Estado garantizará el respeto a este derecho”. En sintonía con nuestra Carta Magna, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente establece en su artículo 1 que dicha ley tiene por objeto “propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: (1) garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”.

El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, del que México es parte desde 1996 y que debe ser garantizado conforme al artículo 1 constitucional, señala que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano...” (11.1) y que “[l]os Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente” (11.2).

El artículo 12.2 b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, como elemento fundamental para su goce, “el mejoramiento en todos sus aspectos [...] del medio ambiente”. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Observación General 14 (2000), uno de los factores determinantes para el ejercicio del artículo 12 del Pacto es precisamente la garantía de condiciones medioambientales sanas.<sup>15</sup> En palabras de dicho órgano, “[e]l Comité interpreta el derecho a la salud [...] como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como [...] condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente” (énfasis propio)<sup>16</sup>.

---

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, comunicación Nº 155/96, *Social and Economic Rights Action Center vs. Nigeria (Ogoniland Case)*, decisión, párr. 67; Corte Europea de Derechos Humanos, *Öneryildiz vs. Turkey* (demanda Nº 48939/99), sentencia, 30 de noviembre de 2004, párr. 118; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, documento OEA/Ser.L/V/II.96 doc. 10 rev. 1; Comité Europeo de Derechos Sociales, demanda Nº 30/2005, *Marangopoulos Foundation for Human Rights vs. Greece*, párr. 221; Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname, serie C, Nº 172, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párrs. 95, 158; caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. el Paraguay, serie C, Nº 125, sentencia de 17 de junio de 2005, párrs. 143, 156; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo vs. Belice, caso 12.053, informe Nº 40/04, documento OEA/Ser.L/V/II.122, doc. 5 rev. 1, párr. 153; Corte Europea de Derechos Humanos, *Fadeyeva vs. Russia* (demanda Nº 55723/00), sentencia de 9 de junio de 2005, párr. 134; *Taşkin and others vs. Turkey* (demanda Nº 46117/99), sentencia de 10 de noviembre de 2004, párr. 126; *López Ostra vs. Spain* (demanda Nº 16798/90), sentencia de 9 de diciembre de 1994, párr. 58.

<sup>15</sup> Comité DESC. Observación General 14, op. cit *supra* nota 4, párr. 11.

<sup>16</sup> *Ibid.*

En el principio 1 de la Declaración de Estocolmo destaca el siguiente fragmento:

Las relaciones establecidas por la Declaración de Estocolmo entre el medio ambiente, el desarrollo, las condiciones de vida adecuadas, la dignidad, el bienestar y los derechos de la persona, incluido el derecho a la vida, implican el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y de calidad, inextricablemente vinculado en sus dimensiones individuales y colectivas a las normas y principios fundamentales de los derechos humanos universalmente reconocidos, y que, como tal, tienen derecho a ser exigidos por los beneficiarios, es decir, los particulares a título individual o colectivo, las colectividades, las asociaciones y demás integrantes de la sociedad civil, así como los pueblos.<sup>17</sup>

Específicamente en relación a los pueblos indígenas, el artículo 4 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala que “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y **el medio ambiente** de los pueblos interesados” (énfasis propio); medidas que, de conformidad con el propio precepto, “no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados”.<sup>18</sup>

Vinculado con ello, destacamos que en el caso de la *Comunidad Indígena Yakye Axa* (2005) la Corte Interamericana determinó lo siguiente:

“[L]os Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, **con el control de su hábitat** como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural” (énfasis propio).<sup>19</sup>

Tanto en ese caso como en el caso de la *Comunidad Indígena Sawhoyamaya* la Corte Interamericana señaló que los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y tribales y que están protegidos en los términos del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son aquellos recursos naturales que

---

<sup>17</sup> Comisión de Derechos Humanos. Informe final de la Relatora Especial, Sra. Fatma Zohra Ksentini, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9 (6 julio 1994), párr. 31.

<sup>18</sup> Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, Convenio 169 (27 junio 1989).

<sup>19</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la comunidad indígena Yakye Axa (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 125 (17 Junio 2005), párr. 146.

han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo.<sup>20</sup>

Resulta interesante observar cómo en el ejercicio hermenéutico de la Corte Interamericana, la protección en favor de los pueblos indígenas se extiende a su *hábitat* - en sintonía con lo establecido en el artículo 4 del Convenio 169- incluyendo los recursos naturales que han usado tradicionalmente. Y ello no con un fin superfluo o necio, sino porque, además de formar parte de su cosmovisión e identidad cultural, los pueblos indígenas mantienen con ellos una relación de *interdependencia* para su supervivencia.

## VII. CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

Elaborar el contenido del derecho humano a un medio ambiente sano constituye un ejercicio hermenéutico que, de conformidad con el artículo 1 constitucional, y atendiendo a la relación de interdependencia entre derechos, deberá ofrecer la mayor protección a la persona.

Para facilitar dicha labor de interpretación acudiremos fundamentalmente a las fuentes internacionales, para lo cual tomaremos en cuenta no sólo los principios y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también aquéllos correspondientes al Derecho Internacional Ambiental. Ello en aras de obtener una interpretación armonizada, integral y coherente del Derecho Internacional que informe y apoye su desarrollo y transmisión al ejercicio jurisdiccional en nuestro país.

Es importante mencionar que el contenido del derecho a un medio ambiente sano está actualmente en proceso de desarrollo en el ámbito internacional. De hecho, apenas en marzo de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al Sr. John Knox *Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible* con el mandato de analizar y ofrecer aclaraciones sobre las obligaciones que impone el deber de proteger y garantizar un medio ambiente sano.<sup>21</sup> Por lo tanto, a través de una decisión que incorpore el análisis y la aplicación del artículo 4, párrafo 5, constitucional y los tratados internacionales relevantes en los Amparos en Revisión mencionados al inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará nutriendo y contribuyendo a esa importante discusión. Proporcionar a la Suprema Corte elementos para mejor resolver a partir de una serie de principios, normas y decisiones ya existentes y que arrojan luz sobre cómo debe ser interpretado el derecho bajo estudio, es el objetivo primordial del presente *Amicus Curiae*.

<sup>20</sup> Ibid., párr. 124 y 137; Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso de la comunidad indígena Sawhoyamaya* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 146 (29 Marzo 2006), párrs. 118 y 121.

<sup>21</sup> Consejo de Derechos Humanos. U.N. Doc. A/HRC/28/L.19. (24 marzo 2015). Disponible en: <http://spinternet.ohchr.org/Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM>

El derecho a un medio ambiente sano tiene dos dimensiones: una sustantiva y una adjetiva.<sup>22</sup> En su dimensión sustantiva el derecho bajo estudio entraña el derecho a vivir en un entorno adecuado para el bienestar y el disfrute de una vida digna. Tal como lo sugiere el nombre de la Relatoría Especial mencionada en párrafos anteriores, el derecho a un medio ambiente sano implica al menos cuatro factores:

- *Sin riesgos*. Implica identificar, prevenir y reducir los riesgos sobre la salud derivados de las actividades humanas tales como los procesos extractivos y de transformación de materias primas, el desarrollo científico y tecnológico, las actividades agropecuarias intensivas y el crecimiento urbano no planificado así como los provenientes de fenómenos como el cambio climático.<sup>23</sup> Algunos ejemplos de dichos peligros pueden ser la escasez de saneamiento y de suministro de agua;<sup>24</sup> la presencia de plomo;<sup>25</sup> pero también la utilización de fertilizantes nocivos.<sup>26</sup> Sobre este último cabe mencionar que “la agricultura a gran escala y el correspondiente uso intensivo de plaguicidas tóxicos representa un importante peligro para la salud”.<sup>27</sup>
- *Limpio*. Ello significa establecer los mecanismos para prevenir y controlar la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera y los daños a la biodiversidad por factores biológicos, físicos, químicos, radioactivos y otros, derivados de las actividades humanas. Así como garantizar su remediación en los casos en los que se requiera.<sup>28</sup>
- *Saludable*. Es necesario garantizar el acceso a recursos básicos (como aire, agua, áreas verdes, etc.) que cuenten con la calidad necesaria que permita a personas y comunidades llevar una vida digna y gozar de bienestar físico y mental. Ello incluye

---

<sup>22</sup> Para elaborar el contenido del derecho bajo estudio en su doble dimensión resulta especialmente útil el “Proyecto de Principios sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente”, elaborado por la Relatora Especial, Sra. Fatma Zohra Ksentini, incluido en su informe final (E/CN.4/Sub.2/1994/9), *supra* nota 17. (ANEXO).

<sup>23</sup> Annalee Yassi y Tord Kjellström (2012). “Conexiones entre la salud ambiental y la salud en el trabajo”. *Riesgos ambientales para la salud en Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.*, Organización Internacional del Trabajo (OIT), p. 53.3. Disponible en: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/53.pdf>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Otros ejemplos disponibles en Prüss-Urstün, op. cit. *supra* nota 5, p.27.

<sup>26</sup> Annalee Yassi y Tord Kjellström, op. cit. *supra* nota 23, p. 53.2.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> El medio ambiente debe encontrarse libre de microorganismos y sustancias dañinas, “tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos”. Comité DESC, op. cit. *supra* nota 4, párr. 15. Véase también Organización Mundial de la Salud, *Guías para la calidad del agua potable*, segunda edición, vols. 1 a 3 (Ginebra, 1993).



la adopción de medidas para garantizar “suelos sanos” y medidas para prevenir potenciales afectaciones a la salud humana.<sup>29</sup>

- *Sostenible*. El derecho humano a un medio ambiente sano, con las características expuestas en los párrafos anteriores, debe poder ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.<sup>30</sup>

En su dimensión adjetiva el derecho humano a un medio ambiente sano entraña el derecho de acceso a la información en materia ambiental; el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos y en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente; el derecho a la reparación por daños ambientales.<sup>31</sup> Derechos que han sido ya reconocidos en diversos instrumentos internacionales y nacionales.

Para los pueblos indígenas, en particular, el Convenio 169 reconoce el derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones legislativas o administrativas que les afecten (artículo 6). Al respecto invocamos nuevamente la jurisprudencia interamericana, que es vasta y clara sobre los estándares que en materia de consulta y participación rigen en beneficio de los pueblos indígenas contra posibles afectaciones.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> El año 2015 es el Año Internacional de los Suelos, así establecido por la Organización de las Naciones Unidas, para promover el uso sustentable del suelo y la adopción de medidas contra la degradación de la tierra. Véase UN News Centre. Spotlighting humanity's “silent ally”, UN launches 2015 International Year of Soils (5 diciembre 2014), disponible en: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49520#.VcQExPIZipA>. En *Karl Heinz et al vs. Freistaat Bayern*, la Gran Sala del Tribunal de Justicia alemán determinó que la miel producida con polen extraído de maíz genéticamente modificado estaba sujeto a medidas especiales de etiquetado en virtud del “potencial riesgo para la salud humana presente”. Sentencia de la Corte (Gran sala) de 6 de septiembre de 2011, caso C-442/09. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=9ea7d0f130d5fc276e09980442569f72e5ed84eae304.e34KaxilC3eQc40LaxqMbN4ObNaPe0?text=&docid=109143&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=133915>.

<sup>30</sup> Comité DESC. Observación General No 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), (29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002), párr. 11. Véase también Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. U.N. Doc. A/HRC/24/44 (11 julio 2013), párr. 11. Véase también Artículo 2.1, inciso a), fracción iii, del Protocolo de Kyoto: “Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes ... Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes...iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones de cambio climático”. Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. U.N. Doc. FCCC/CP/1997/7/Add.1, Dec. 10, 1997; 37 ILM 22 (1998).

<sup>31</sup> Alexandre Kiss and Dinah Shelton. 2000. *International Environmental Law* (second edition). Transnational Publishers, Inc. Estados Unidos de América.

<sup>32</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad indígena *Mayagna (Sumo) Awas Tingni* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 79 (31 agosto 2001); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad indígena *Yakye Axa* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 125 (17 junio 2005); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad indígena *Sawhoyamaya* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 146 (29 March 2006); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad indígena *Saramaka* (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Serie C No 172 (28 noviembre 2007); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la



En el ámbito del derecho interno es dable mencionar la tesis de rubro COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES, emitida por la Primera Sala; tesis que transcribimos a continuación:

La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de la participación en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.<sup>33</sup>

#### **VIII. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO**

Si bien la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter progresivo y está sujeta a la disponibilidad de recursos, de acuerdo con el artículo 1 del Protocolo de Salvador, frente a una formulación similar de obligaciones en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité encargado de supervisar el cumplimiento de dicho tratado señala que el artículo 2.1 del Pacto<sup>34</sup> (el Comité DESC) “debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser,

---

comunidad indígena *Xákmok Kásek* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 214 (24 agosto 2010); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad indígena *Kichwa de Sarayaku* (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No 245 (27 June 2012).

<sup>33</sup> Tesis: 1a. CCXXXVI/2013 (10a.), 2004170, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, pág. 736.

<sup>34</sup> Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 diciembre 1966), *Treaty Series*, vol. 993, p. 3.

del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata”.<sup>35</sup>

En este orden de ideas, señala el Comité DESC, existen obligaciones de inmediato cumplimiento, señala el Comité; a saber: garantizar el ejercicio del derecho sin discriminación; tomar medidas deliberadas, concretas y dirigidas lo más claramente posible a cumplir con las obligaciones que el tratado impone y evitar a toda costa medidas regresivas.<sup>36</sup> Además, los Estados tienen la “obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”.<sup>37</sup>

En sus Observaciones Generales 14 y 15, que versan sobre el contenido y el alcance de otros derechos económicos, sociales y ambientales, y concretamente el derecho a la salud y el derecho al agua, respectivamente, el Comité reconoce lo anteriormente dicho como obligaciones legales de carácter general. Luego de ello procede a analizar las obligaciones legales específicas, obligaciones que a juicio del Comité derivan de *todos* los derechos humanos: respetar, cumplir y proteger.<sup>38</sup>

De acuerdo con lo reiteradamente dicho por el Comité DESC, la obligación de respetar, en términos negativos, exige la abstención de injerencia directa o indirecta en el ejercicio del derecho.<sup>39</sup> La obligación de cumplir entraña el deber positivo de adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a ese derecho.<sup>40</sup> Finalmente, la obligación de proteger impone el deber de impedir a terceros que menoscaben el disfrute del derecho.<sup>41</sup>

En sintonía con ello, argumentamos aquí que el derecho humano a un medio ambiente sano impone las mismas obligaciones a los Estados. Para interpretar dichas obligaciones en relación al derecho bajo estudio, y para apoyar el ejercicio hermenéutico que haga, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 4 constitucional, sirven de gran apoyo las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos e incluso el derecho comparado.

---

<sup>35</sup> Comité DESC, Observación General No 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), (Quinto período de sesiones, 1990), U.N. Doc. E/1991/23 (1990), párr. 9.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., párr. 10

<sup>38</sup> Véase en particular Comité DESC. Observación General No 14, op. cit., *supra* 4 párr. 34; Comité DESC. Observación General No 15, op. cit. *supra* nota 30, párr. 20. Comité DESC. Observación General No 12, El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), (20º período de sesiones, 1999), U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999), párr. 15; Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy* (2<sup>nd</sup> ed, 1996) 52. Asbjørn Eide, UN Special Rapporteur for the Right to Food, *The Right to Adequate Food as a Human Right: Final Report submitted by Asbjørn Eide*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1987/23 (1987) [67]–[69].

<sup>39</sup> Véase por ejemplo Comité DESC. Observación General No 15, op. cit. *supra* nota 30, párr. 21.

<sup>40</sup> Ibid., párr. 25.

<sup>41</sup> Ibid., párr. 23.

Aunque ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni sus Protocolos incluyen el derecho humano a un medio ambiente sano, en diversas ocasiones la Corte Europea ha declarado que hubo violaciones al Convenio por afectaciones causadas por alteraciones ambientales como la contaminación (en diversas modalidades, incluyendo la auditiva), aun cuando aquélla fue provocada por acciones de empresas. Estas decisiones, además de confirmar la relación de interdependencia existente entre el ejercicio de los derechos y las condiciones ambientales, arrojan luz sobre el alcance de las obligaciones derivadas del derecho humano a un medio ambiente sano. Históricas decisiones como aquéllas en los casos *López Ostra*, *Guerra y otros*, *Öneryildiz* y *Fadeyeva* informan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido.<sup>42</sup>

En su histórica sentencia en el caso *López Ostra vs. España* (1994), la Corte Europea declaró que había habido una violación al derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8), entre otros, de la señora Gregoria López Ostra por la contaminación causada por una planta de tratamiento de residuos perteneciente a la empresa SACURSA. En dicho caso, aunque el gobierno de España no era responsable directo por las emisiones de la planta, el Tribunal Europeo puntualizó que el Estado había permitido la construcción de la misma y que era altamente dudoso que los miembros del Consejo Municipal no estuvieran al tanto de los problemas medioambientales.

En *Guerra y otros vs. Italia* (1998) la Corte señaló que Italia había incurrido en una violación al artículo 8 del Convenio por no haber tomado las medidas necesarias para proteger los derechos de los peticionarios frente a los gases inflamables que estaba emitiendo una planta de fertilizantes de la empresa EniChem Agricultura.

De gran importancia es también la decisión de la Corte en *Oneryildiz vs Turquía* (2002), en la cual declaró que hubo violaciones al Convenio (incluyendo el derecho a la vida) por la falta de adopción de medidas frente al *riesgo* que representaba la operación de un basurero que no cumplía con los estándares técnicos y que explotó en 1993.

Cabe destacar la sentencia de la Corte Europea en *Fadeyeva vs. Rusia* (2005), donde -aun cuando la peticionaria no pudo demostrar el *nexo causal* entre la enfermedad que adquirió y la operación de una planta metalúrgica- la Corte Europea determinó que la salud de la peticionaria se había deteriorado como resultado de la exposición prolongada a las emisiones de aquélla y declaró que en efecto había habido una violación del Convenio.

Además de las decisiones anteriormente mencionadas traemos a la especial atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el caso *Centro de Acción de Derechos Económicos y Sociales*

---

<sup>42</sup> Otros casos relevantes son *Zander vs. Suecia* (1993), *Taskin y otros vs. Turquía* (2004), *Giacomelli vs. Italia* (2006), todos de la Corte Europea de Derechos Humanos.

y *Centro para los Derechos Económicos y Sociales vs. Nigeria* (2001). En este caso la Comisión Africana analizó, aplicó y declaró violado el artículo 24 de la Carta de Banjul relativo al derecho a un entorno general satisfactorio, entre otros derechos. Ello en virtud de la contaminación provocada en detrimento de la comunidad Ogoni por la compañía petrolera estatal *Nigerian National Petroleum Company*, que operaba en consorcio con la compañía petrolera extranjera *Shell Petroleum Development Corporation*.

En dicho caso la Comisión Africana señaló que “[e]l derecho a un entorno global satisfactorio, tal como está consagrado en el artículo 24 de la Carta Africana o el derecho a un medio ambiente sano, como es ampliamente conocido, impone claras obligaciones al gobierno”.<sup>43</sup> En este sentido, “impone al Estado el deber de tomar medidas razonables y otras para prevenir la contaminación y la degradación ambiental, para promover la conservación y para garantizar un desarrollo y un uso de recursos naturales sostenible.”<sup>44</sup>

Las decisiones antes mencionadas nos aportan ya algunos elementos de análisis sobre el alcance que deberían tener las obligaciones derivadas del derecho humano a un medio ambiente sano. En primer lugar podemos teorizar que del derecho bajo estudio se desprende la obligación negativa del Estado de abstenerse de realizar actividades que impliquen la contaminación o la degradación del medio ambiente en detrimento de la salud de las personas; obligación que cae dentro de la categoría de *respeto* mencionada en párrafos anteriores.

En segundo lugar, es posible colegir que del derecho humano a un medio ambiente sano se desprende la obligación positiva de adoptar medidas para prevenir o detener actividades que causen daños ambientales o que representen un riesgo de daño, con previsibles afectaciones a la salud humana; es decir, se actualiza igualmente un deber de *cumplir*.

Finalmente observamos de manera destacada el deber de impedir que terceros menoscaben el disfrute de este derecho. En este sentido, coincidimos con quienes argumentan que garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano “implica adoptar reglas de fiscalización de las actividades particulares, para prevenir y controlar las actividades que riesgos ambientales”.<sup>45</sup> En otras palabras, se desprende del derecho humano a un medio ambiente sano el deber de *proteger*.

Dicho lo anterior el presente *Amicus* busca argumentar que para cumplir estas obligaciones es necesario *inter alia* que el Estado adopte medidas de carácter preventivo y precautorio, tal como se expondrá con mayor detalle en los párrafos que siguen. Medidas

---

<sup>43</sup> Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. *The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria*, Comm. No. 155/96 (2001), párr. 52.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Gabriela Cuadrado Quesada, El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en el derecho internacional y en Costa Rica, *Revista CEJIL “Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano”*. Año IV No 5 (diciembre de 2009), p. 3. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24270.pdf>.

que, interpretadas en sintonía con el estándar establecido por el Comité DESC, deben ser deliberadas, concretas y dirigidas lo más claramente posible al cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y evitando a toda costa medidas regresivas. En la garantía de estas obligaciones derivadas del derecho humano a un medio sano se debe preservar el derecho a la no discriminación.

#### **IX. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRECAUTORIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO**

Dos principios fundamentales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano en los términos antes señalados son el principio de prevención y el principio de precaución. Sin duda alguna existe para el Estado un deber general de prevención, que no es extraño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Interamericana a lo largo de su jurisprudencia. Pero además, en materia ambiental, es posible afirmar que se actualiza un deber reforzado de prevención, principio que se ha consolidado como uno de los grandes ejes del *corpus juris* ambiental<sup>46</sup> y que, además, encuentra fundamento legal interno en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.<sup>47</sup>

En palabras de Alexandre Kiss y Dinah Shelton, expertos y pioneros del Derecho Internacional Ambiental, “la experiencia y la ciencia demuestran que la prevención debe ser la Regla de Oro para el ambiente, tanto por razones ecológicas como económicas” (traducción propia).<sup>48</sup> La obligación primaria que se desprende de este principio, señalan, es la evaluación previa de actividades potencialmente dañinas<sup>49</sup> y el deber de “adoptar medidas para evitar daño o reducir o eliminar el riesgo de daño [ambiental]”.<sup>50</sup>

En el mismo sentido, la Doctora Tania García López expone que “el enfoque preventivo del derecho ambiental consiste en que las normas jurídicas establezcan disposiciones tendentes a que el daño ambiental no se cause, finalidad que se puede alcanzar mediante el establecimiento de medidas específicas para la ejecución de actividades que puedan

---

<sup>46</sup> Declaración de Río (principio 17); Agenda 21 (capítulo 22); Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículo 14); Convención sobre el Derecho del Mar (artículo 206); Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo (1991); Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales (1992); Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993); Convenio sobre la Conservación de la Naturaleza en el Pacífico Sur (1976).

<sup>47</sup> Las disposiciones de dicha ley, de acuerdo con el artículo 1, tienen por objeto, *inter alia*, “VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo”.

<sup>48</sup> Alexandre Kiss y Dinah Shelton, op. cit. *supra* nota 31, p. 263.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> La conceptualización es ofrecida por dos grandes expertos en Derecho Ambiental, Alexandre Kiss y Dinah Shelton en su texto (2000) “International Environmental Law”. Estados Unidos: Transnational Publishers. Op. cit. *supra* nota 31.



ocasionarlo, mediante la delimitación en el uso de determinados materiales o, en su caso, exigiendo el manejo de una tecnología determinada”.<sup>51</sup>

El segundo principio destacado aquí es el de precaución. Si bien es cierto que persiste una discusión sobre si el principio precautorio llega a constituir una norma de derecho consuetudinario, existe consenso en la comunidad internacional en que se trata de un principio de derecho internacional.<sup>52</sup> En esa calidad ha sido aplicado, por ejemplo, por los tribunales brasileños en litigios instaurados contra la autorización de la comercialización de soya transgénica.<sup>53</sup> Y de hecho, “aparece en casi todos los instrumentos internacionales relacionados con la protección al ambiente desde 1990”,<sup>54</sup> incluyendo el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (artículo 1), tratado que fue ratificado por México en el año 2002:

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Como el principio de prevención, el principio precautorio busca evitar el daño ambiental cuando las consecuencias de la falta de acción serían especialmente serias.<sup>55</sup> De acuerdo con el principio 15 de la Declaración de Río, “los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución, conforme a sus capacidades”. Pero además, y aquí encontramos un elemento clave de este principio, “la falta de certeza científica absoluta no deberá de

---

<sup>51</sup> García López, Tania (2013). *Derecho Ambiental Mexicano. Introducción y Principios*. México: Bosch, pág. 153.

<sup>52</sup> Para la Comunidad Europea se trata de un principio de derecho consuetudinario o en todo caso un principio del derecho internacional. En países como India o Pakistán los tribunales le han dado el tratamiento –y en ese carácter lo han aplicado –de un principio de derecho internacional. Birnie, Boyle y Redgwell (2009). *International Law & the Environment*. Gran Bretaña: Oxford, p. 162 y 162.

<sup>53</sup> Lesley K. McAllister. Judging GMOs: Judicial Application of the Precautionary Principle in Brazil, *Ecology Law Quarterly* Vol. 32, Issue 1 (January 2005): 149-174, p. 158, quien además cita otras fuentes que dan cuenta de la utilización del principio precautorio en esta calidad por tribunales en Australia, Canadá, Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania.

<sup>54</sup> Alexandre Kiss y Dinah Shelton, op. cit. *supra* nota 31, p. 264. Véase Convención de Bamako sobre la Prohibición de la Importación de Desechos Peligrosos a África y la Fiscalización de los Movimientos Transfronterizos y el Manejo dentro de África (1991); Convenio de Helsinki sobre la Protección y el Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales (1992); Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992); el Tratado de Maastricht de la Unión Europea lo reconoce como un principio básico de su política ambiental (1992); entre al menos 80 otros acuerdos internacionales. Véase *GMOs & the Precautionary Principle* (2005), p. 153.

<sup>55</sup> Alexandre Kiss y Dinah Shelton, op. cit. *supra* nota 31, p. 264

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.<sup>56</sup>

Dicho principio impone el deber de actuar de forma diligente para evitar riesgos previsibles de daño,<sup>57</sup> incluso frente a la falta de certeza científica sobre los daños que determinada actividad pueda ocasionar. Basta con que existan visiones encontradas dentro de la comunidad científica respecto de los daños que determinada actividad tendría sobre el ambiente para considerar que existe incertidumbre científica.<sup>58</sup>

El principio precautorio ha sido invocado, por ejemplo, por la Suprema Corte de India desde finales de los años noventa en sus decisiones en casos ambientales. En particular ha sostenido que “[el principio precautorio] está basado en la teoría de que es mejor errar por el lado de la precaución y evitar daños al medio ambiente que de hecho pueden llegar a ser irreversibles. El principio de precaución implica la anticipación de daños ambientales y la adopción de medidas para evitarlos [...]” (traducción propia).<sup>59</sup>

Junto con el principio de prevención, el principio de precaución conforma un binomio que en la práctica activa el deber permanente del Estado de extremar su cautela en el tratamiento, monitoreo y/o vigilancia respecto de actividades que causan o pueden causar un daño ambiental. El principio [y el deber] de prevención impone al Estado la obligación de actuar para impedir daños o el riesgo de daños ambientales previsibles. El principio precautorio reitera dicha obligación incluso cuando no existe certeza científica de los daños. En otras palabras, no es necesario probar que determinada actividad causará un daño serio o irreversible para tomar medidas preventivas.<sup>60</sup>

Las implicaciones específicas de este principio, es decir, el contenido del “deber de actuar”, es decir, las características de las medidas a tomar frente a la incertidumbre científica no fueron establecidos de manera taxativa en la Declaración de Río. Sin embargo, ha sido señalado por algunos que una expresión del “deber de actuar” recae sobre el órgano ejecutivo en el sentido de prohibir o restringir cierta actividad o producto cuando exista incertidumbre sobre los potenciales daños ambientales que éste pueda tener o, al menos, tomar en cuenta dicha incertidumbre al determinar si y cómo

---

<sup>56</sup> Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I) / 31 ILM 874 (1992).

<sup>57</sup> Birnie, Boyle y Redgwell (2009). *International Law & the Environment*. Gran Bretaña: Oxford.

<sup>58</sup> Ibid., p. 156, citando *Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)*. Organización Mundial del Comercio, Órgano de Apelación (WT/DS26/AB/R y WT/DS48/AB/R), decisión del 16 de enero de 1998, párr. 194.

<sup>59</sup> Suprema Corte de India: A.P. Pollution Control Board vs Prof.M.V.Nayudu (Retd.) & Others (27 de enero de 1999), disponible en: <http://indiankanoon.org/doc/764031/>. Véase también Vellore Citizens Welfare Forum vs Union Of India & Ors (28 de Agosto de 1996), disponible en: <http://indiankanoon.org/doc/1934103/>; S. Jagannath vs Union Of India & Ors (11 de diciembre de 1996), disponible en: <http://indiankanoon.org/doc/507684/>. Sitios visitados el 3 de agosto de 2015.

<sup>60</sup> Birnie, Boyle y Redgwell, op. cit. *supra* nota 56, p. 163.

proceder.<sup>61</sup> La autora Lesley K. McAllister resume de la siguiente manera algunas decisiones ilustrativas:

En 1993 un tribunal australiano aplicó el principio para posponer la construcción de una avenida hasta que el gobierno tuviera más información sobre la población y el hábitat de una especie de rana amenazada; la Suprema Corte paquistaní aplicó el principio precautorio en un caso 1994 para dejar sin efecto la autorización para construir una planta de energía hasta en tanto se tuviera mayor evidencia científica sobre la inocuidad de los campos electromagnéticos; en 1996 la Suprema Corte de India invocó el principio como fundamento legal para ordenar la implementación de medidas estrictas de control de contaminación industrial y el cierre de instalaciones que no cumplieran con las mismas.<sup>62</sup>

Es importante resaltar que el principio precautorio ofrece al órgano ejecutor un fundamento legal para prohibir o restringir una actividad.<sup>63</sup> Por su parte, al órgano revisor o de control, el principio precautorio proporciona sustento para analizar de forma escrupulosa si en el proceso de toma de decisiones para autorizar cierta actividad, el órgano ejecutor consideró o no y de qué manera el grado de incertidumbre científica en relación al riesgo de daños ambientales.<sup>64</sup> Sobre el particular, McAllister expone cómo en los tribunales estadounidenses se ha desarrollado la doctrina de la “mirada dura” (traducción literal de “*hard look*”), que implica un análisis muy detenido y riguroso para evitar decisiones ejecutivas excesivamente discrecionales que, al omitir la introducción de los factores de riesgo y de incertidumbre científica en el proceso de toma de decisiones, impactan negativamente en el ambiente.<sup>65</sup>

Al ejercer su control sobre decisiones ejecutivas, los tribunales han de realizar un análisis riguroso del proceso interno que llevó a la determinación del órgano,<sup>66</sup> con miras a reducir la posibilidad de decisiones arbitrarias, y para ejercer una efectiva facultad de supervisión que exija a los órganos ejecutivos la identificación y evaluación de áreas en las que prevalece incertidumbre científica.<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> Lesley K. McAllister op.cit *supra* nota 53, p. 155.

<sup>62</sup> Ibid. p. 159.

<sup>63</sup> Ibid., p. 157, citando a David Vogel, *The Hare and the Tortoise Revisited: The New Politics of Consumer and Environmental Regulation in Europe*, 33 BRIT. J. POL. SCI. 557, 561-62 (2003); Trouwborst, *supra* note 14, at 189-200; Daniel Bodansky, *The Precautionary Principle in US Environmental Law*, in INTERPRETING THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE (Timothy O’Riordan & James Cameron eds., 1994).

<sup>64</sup> Lesley K. McAllister op.cit *supra* nota 53, p. 170.

<sup>65</sup> Ibid., p. 169.

<sup>66</sup> Lesley K. McAllister citando a Harold Leventhal, *Environmental Decisionmaking and the Role of the Courts*, 122 U. PA. L. REV. 509, 512-13 (1974); Cass R. Sunstein, *Deregulation and the Hard-Look Doctrine*, 1983 SuP. CT. REV. 177, 181 (1983), p. 169.

<sup>67</sup> Ibid., p. 173.

## **X. CONCLUSIÓN**

Habiendo reconocido la fundamental relación que existe entre el derecho a un medio ambiente sano y el goce de otros derechos humanos, y frente a la etapa temprana en la que se encuentra el desarrollo del primero a nivel internacional, destacamos la gran oportunidad que tiene ante sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contribuir a la interpretación del contenido y el alcance del derecho bajo estudio.

En efecto, al interpretar y aplicar el artículo 4, párrafo 5, constitucional en los Amparos en Revisión referidos al inicio, mediante un ejercicio hermenéutico que favorezca la mayor protección de la persona de conformidad con el artículo 1 constitucional, y de acuerdo a los estándares internacionalmente establecidos, la Suprema Corte estará aportando elementos de análisis de la mayor relevancia a la discusión internacional sobre la materia, además de proteger los derechos de los pueblos afectados en los casos que tiene ante sí.

Adicionalmente, el control que pueda ejercer nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la aplicación del principio de prevención y el principio de precaución, será fundamental para avanzar en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano, en beneficio no sólo del medio ambiente, sino fundamentalmente de las personas que se ven afectadas por su degradación; y, en última instancia, del goce efectivo de éste por las generaciones futuras.

## **XI. PETITORIO**

Dicho lo anterior, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenga por presentado este documento en calidad de *Amicus Curiae* y consideren los elementos de análisis aquí vertidos al momento de resolver los Amparos en Revisión mencionados al inicio.

**México, D.F. a 18 de agosto de 2015**

**R E S P E T U O S A M E N T E.**

**“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”**

**Denise González Núñez, M.St.**  
**PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS**  
**COORDINADORA**

**Mtra. Dulce María Ramos M.**  
**PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE**  
**COORDINADORA**

**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO**  
Prolongación Paseo de Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, C.P. 01219, D.F.